



ALBA contra ALCA

La Alternativa Bolivariana para las
Américas: una nueva vía para la integración
regional en Latinoamérica

Thomas Fritz

Abril 2007

Thomas Fritz: ALBA contra ALCA

La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica

Centro de Investigación y Documentación Chile – Latinoamérica – FDCL

Berlín, abril de 2007

Traducción: Jan Stehle

© FDCL, Berlín, abril de 2007

Traducción actualizada del texto original

"ALBA contra ALCA – Die Bolivarianische Alternative für die Amerikas:
ein neuer Ansatz regionaler Integration in Lateinamerika"

ISBN 13: 978-3-923020-34-8 – ISBN 10: 3-923020-34-1

Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. (FDCL)

Gneisenastr. 2a

10961 Berlín

Tel: 030/693 40 29

Fax: 030/692 65 90

Email: info@fdcl.org

Internet: www.fdcl.org

ÍNDICE

Listado de abreviaturas.....3

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. VIENTOS DE CAMBIO EN LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.....	5
2.1. ALBA: LA RESPUESTA VENEZOLANA.....	5
2.2. CSN/UNASUR: LA RESPUESTA BRASILEÑA.....	6
2.3. ESCEPTICISMO: LA RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL.....	7
2.4. TRATADOS DE LIBRE COMERCIO: LA RESPUESTA EUROPEA Y ESTADOUNIDENSE	7
3. ALBA: LA ALTERNATIVA BOLIVARIANA.....	8
3.1. LA ALIANZA BOLIVARIANA TRIPARTITA.....	9
3.1.1. <i>Cooperación venezolana-cubana</i>	9
3.1.2. <i>El ingreso de Bolivia: un 'Tratado de Comercio de los Pueblos'</i>	10
3.1.3. <i>Consideración de las asimetrías</i>	11
3.2. ALIANZAS DE EMPRESAS ESTATALES.....	11
3.3. LA RELACIÓN CON LOS MOVIMIENTOS SOCIALES.....	12
3.3.1. <i>La idea de la participación</i>	13
4. EN FOCO: LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA.....	13
4.1. NACIONALIZACIÓN EN VENEZUELA.....	13
4.2. LA VUELTA DEL ESTADO.....	14
4.3. PETROAMÉRICA: UNA VISIÓN LATINOAMERICANA.....	15
4.3.1. <i>Petrocaribe</i>	15
4.3.2. <i>Más que negocios petroleros preferenciales</i>	16
4.3.3. <i>Ampliación conjunta de la infraestructura</i>	17
4.3.4. <i>Petrosur</i>	17
4.3.5. <i>Petroandina</i>	18
4.4. GRAN GASODUCTO DEL SUR: UN MEGAPROYECTO CONTROVERTIDO.....	18
4.4.1. <i>Dudas acerca de la factibilidad</i>	19
4.4.2. <i>Bolivia como perdedor</i>	19
4.4.3. <i>Financiamiento incierto</i>	19
4.4.4. <i>Protestas de organizaciones no gubernamentales</i>	20
4.5. ENERGÍA: ¿UN VEHÍCULO ADECUADO PARA LA INTEGRACIÓN?.....	20
4.5.1. <i>La „fuerza expansiva“ del rumbo nacionalizador</i>	20
4.5.2. <i>La influencia creciente de Venezuela</i>	21
4.5.3. <i>Ruptura con los principios del ALBA</i>	21
4.5.4. <i>El déficit: La democratización de las empresas públicas</i>	22
5. CONCLUSIÓN: AVANCES Y CONTRADICCIONES	23
5.1. ENTRE SOLIDARIDAD Y LIBRE COMERCIO.....	23
5.2. ENTRE AUTONOMÍA Y EL PAGO DE LA DEUDA.....	23
5.3. EL DESAFÍO DEMOCRÁTICO	24
6. LITERATURA	25
7. ANEXO	26
Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE del 29 de junio del 2005.....	26

Listado de abreviaturas

ACEC	Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas
ACP	Grupo de 77 países africanos, caribeños y pacíficos
ALBA	Alternativa Bolivariana para las Américas
ALCA	Área de Libre Comercio de las Américas
ASC	Alianza Social Continental
CAFTA	Central American Free Trade Agreement
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CARICOM	Caribbean Common Market
CSN	Comunidad Sudamericana de Naciones
EMPRESUR	Empresas Recuperadas del Sur
ENARSA	Energía Argentina Sociedad Anónima
FMI	Fondo Monetario Internacional
GNL	Gas Natural Licuado
IBCE	Instituto Boliviano de Comercio Exterior
IEH	Iniciativa Energética Hemisférica
IIRSA	Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana
ILDIS	Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MNER	Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
NAFTA	North American Free Trade Agreement
OMC	Organización Mundial del Comercio
OPEP	Organización de Países Exportadores de Petróleo
PDVSA	Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima
PEMEX	Petróleos Mexicanos
PIT-CNT	Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores
TCP	Tratado de Comercio de los Pueblos
UNASUR	Unión de Naciones Suramericanas
UNT	Unión Nacional de Trabajadores
YPF	Yacimientos Petrolíferos Fiscales
YPFB	Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos

1 Introducción

El paisaje político de la integración latinoamericana está cambiando profundamente. El proyecto de construir una zona de libre comercio panamericana, ALCA, un proyecto neoliberal basado en la competencia y liderado por los Estados Unidos, está estancado. Al mismo tiempo la discusión sobre la integración latinoamericana se está intensificando, empujada por iniciativas concretas de gobiernos de izquierda, que apuestan a relaciones solidarias en vez de competitivas. El alejamiento más evidente del dogma liberal lo están llevando a cabo el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), iniciado por Venezuela, y el concepto de contratos de comercio alternativos TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos), promovido por Bolivia.

Bajo el techo de ALBA el gobierno venezolano no sólo ha desarrollado una visión ambiciosa de una integración latinoamericana solidaria, sino también ha llevado adelante un gran número de cooperaciones interestatales, especialmente en el sector energético.

Las expresiones más claras de estas actividades han sido el acuerdo sobre la entrega preferencial de petróleo, Petrocaribe, y el contrato de cooperación entre Venezuela, Cuba y Bolivia, ALBA-TCP. En enero del 2007 el nuevo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, anunció el ingreso de su país al ALBA. Además de eso, Venezuela ha integrado a otros países en su "Alternativa Bolivariana para las Américas" a través de proyectos conjuntos.

Este nuevo enfoque ha despertado un gran interés en todo el subcontinente y representa un enriquecimiento valioso del revitalizado debate latinoamericano sobre integración regional. ALBA sirve como ejemplo para ilustrar los márgenes de acción de gobiernos, que intentan dar pasos concretos para salir del callejón sin salida neoliberal. Sin embargo, como cualquier proyecto realista de transformación, el ALBA está sujeto a contradicciones que una y otra vez llevan a conflictos con sus propias aspiraciones. Al mismo tiempo, se han podido constatar una serie de logros que han abierto el paso hacia una integración social y solidaria.

La siguiente discusión del ALBA va a considerar ambos aspectos. Los avances y las contradicciones de esta vía alternativa de integración serán discutidos mediante el análisis de las iniciativas más importantes del ALBA. Punto central serán los tratados entre Venezuela, Cuba y Bolivia, además de las iniciativas energéticas. Los protagonistas del ALBA justamente le otorgan una gran importancia a la integración energética, por lo cual el análisis de aspiraciones y realidades de la Alternativa Bolivariana en el ámbito energético también será objeto de este estudio.

El interés por estos nuevos enfoques integracionistas, sin embargo, no se limita a América Latina. También en Europa lentamente está comenzando una discusión más intensiva sobre el ALBA, el TCP y otras alternativas. Después del fracaso del Tratado Constitucional movimientos progresistas de la Unión Europea están desarrollando modelos de una integración social, con equidad entre los estados. En este sentido los modelos latinoamericanos pueden también estimular la discusión en Europa.

2 Vientos de cambio en la integración latinoamericana

A finales del 2005 en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata (Argentina) una parte importante de los estados sudamericanos rehusó seguir el liderazgo de Estados Unidos. Especialmente los gobiernos de Argentina, Brasil y Venezuela se negaron a retomar las negociaciones estancadas sobre el ALCA. Desde entonces, este proyecto central del gobierno estadounidense está congelado.

Este éxito se hizo posible gracias a una amplia campaña de los movimientos sociales. Desde el inicio oficial de las negociaciones sobre el ALCA en 1994 especialmente la red Alianza Social Continental (ASC) ha logrado ampliar y unificar la resistencia en contra del área de libre comercio. La cumbre de Mar del Plata, por lo tanto, marcó un giro importante en la política latinoamericana contemporánea. La Alianza Social Continental ve un "nuevo escenario". Mientras hasta ese entonces había centrado sus acciones defensivas en impedir el ALCA, en adelante se podrán desarrollar nuevos modelos propios de integración y revisar críticamente los ya existentes.¹

En ese marco los dos bloques económicos regionales sudamericanos – la Comunidad Andina (CAN) y el MERCOSUR – han entrado en movimiento, lo cual también se debe, en parte, a los EEUU. Especialmente la Comunidad Andina está inmersa en un proceso de erosión debido a graves diferencias políticas. Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia forman parte de la CAN. Venezuela se retiró del bloque en abril del 2006, después de que Colombia y Perú acordasen la firma de tratados bilaterales de libre comercio con los Estados Unidos. Los tratados bilaterales se consideran una respuesta de los EEUU ante el bloqueo del ALCA. De hecho, entrañan un factor explosivo frente a los bloques regionales existentes. El economista argentino Claudio Katz, al respecto, habla de una estrategia norteamericana de "balcanización comercial".²

Venezuela mientras tanto, al poco tiempo de su retiro de la CAN, fue admitida como miembro pleno del MERCOSUR. Este área de libre comercio fue creado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en 1991. Bolivia es miembro asociado del MERCOSUR y está aspirando a ser miembro pleno. De la misma manera el presidente de izquierda de Ecuador recién electo, Rafael Correa, ha expresado su interés por entrar al MERCOSUR.

Sin embargo, a pesar de este interés intensivo por el bloque, el MERCOSUR sigue siendo marcado por conflictos internos. Entre los motivos de disputa se encuentran el predominio del gigante económico Brasil, la competencia fuerte entre Argentina y Brasil, y la marginalización de los dos miembros pequeños Uruguay y Paraguay. Estos últimos incluso amenazaron hace poco con firmar acuerdos de libre comercio bilaterales con los Estados Unidos. La disputa actual entre Uruguay y Argentina por la instalación de una papelera contaminante en Uruguay es otro ejemplo de la deficiente capacidad de resolución de disputas internas del MERCOSUR.

2.1 ALBA: la respuesta venezolana

Al mismo tiempo de su entrada al MERCOSUR, Venezuela lanzó el ALBA, un proyecto de integración basado en principios completamente distintos a los de la CAN o el MERCOSUR.

El MERCOSUR ha apostado a un regionalismo abierto hacia el exterior y basado en las exportaciones, un concepto que predomina desde finales de los ochenta. Este "regionalismo abierto" acabó con la protección estatal de la economía nacional, que había sido practicado durante la era de la sustitución de importaciones. El modelo basado en las exportaciones requería un desmantelamiento de barreras arancelarias, para poder importar insumos necesarios a bajo costo. Desde entonces, la integración regional ha servido sobre todo como paso intermedio hacia la integración al mercado mundial. Prometía una reducción de costos en base a la reducción de barreras comerciales y debido a los efectos de escala y de especialización en la producción para la exportación. En vez de satisfacer la demanda regional ahora la meta es la demanda mundial. El estado se ha retirado ampliamente como actor económico, siendo reemplazado por la iniciativa privada y la mera regulación de los mercados.

El regionalismo abierto postula la liberalización de todos los sectores económicos y la "reciprocidad" en la apertura de mercados, en conformidad con las exigencias de la OMC. Por el contrario, la propuesta ALBA propone "cooperación", "complementariedad" y "solidaridad". Se consideran los diferentes niveles de desarrollo, los puntos fuertes y las

¹ Alianza Social Continental, 'Algunos Puntos para el Debate sobre Integración Regional', Documento de Trabajo, 10 de agosto de 2006.

² Claudio Katz, 'El torbelino de la integración', 25 de julio de 2006, www.cadtm.org

debilidades de las economías participantes y los intereses específicos de los estados por proteger a determinados sectores. Bajo este concepto tienen prioridad los proyectos de cooperación en beneficio mutuo, especialmente los que se dan entre empresas estatales. Además se resaltan las transacciones compensatorias que no requieren recurrir al gasto de divisas. Los objetivos centrales del ALBA son el combate a la pobreza y el desarrollo social.

La visión de una integración latinoamericana solidaria que representa el ALBA se materializa en tratados de cooperación concretos. Después de que Venezuela y Cuba firmaran el tratado del ALBA en diciembre del 2004, Bolivia firmó su ingreso en abril del 2006. A mediados de enero del 2007 el presidente recién electo de Nicaragua, Daniel Ortega, declaró el ingreso de su país al ALBA. El próximo posible candidato es Ecuador, cuyo nuevo presidente Rafael Correa ya ha tenido las primeras conversaciones al respecto.

Aparte de este núcleo de países, Venezuela en junio del 2005 firmó un tratado de cooperación energética con 13 países, « Petrocaribe ». Los países caribeños firmantes se comprometen a coordinar su política energética, mientras que Venezuela entrega petróleo a condiciones preferenciales. Es evidente que la riqueza en petróleo de Venezuela sirve como un lubricante importante de la integración. Por medio de cooperaciones bilaterales, Venezuela está intentando incluir a países como Argentina, Brasil y Uruguay.

La propuesta ALBA, por lo tanto, no solamente representa una alternativa real al proyecto de la zona de libre comercio ALCA, dominada por los EEUU, sino también se puede entender como una crítica a los bloques económicos existentes, MERCOSUR y CAN. El ingreso de Venezuela al MERCOSUR, sin embargo, demuestra que al parecer ni el propio gobierno venezolano espera una pronta expansión del ALBA por el subcontinente. Más bien el ALBA serviría como especie de proyecto referencial.

El presidente venezolano Hugo Chávez ha expresado su intención de tematizar los principios del ALBA en el MERCOSUR. Antes de ser ratificado Venezuela como miembro pleno, exigió reiteradamente que a futuro el bloque debería darle prioridad al desarrollo social. "Solidaridad, cooperación y complementariedad" deberían constituir las bases del MERCOSUR, no "la competencia económica".³ No se sabe si el propio Chávez considera realista un desarrollo de tales características. El impacto en las discusiones a nivel regional,

sin embargo, parece ser una función importante del ALBA.

2.2 CSN/UNASUR: la respuesta brasileña

A la par con la fundación del ALBA y en el marco de su tercera cumbre en Cuzco (Perú) en diciembre del 2004, los 12 jefes de estado de Sudamérica dieron nacimiento a un nuevo ente político: La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN). En la primera cumbre energética sudamericana, el 16 de abril del 2007 en Venezuela, los jefes de estado participantes acordaron rebautizarla y le pusieron el nombre Unión Suramericana de Naciones. Con la excepción de la Guayana Francesa, la totalidad de los estados sudamericanos forman parte de la CSN/UNASUR. Esta iniciativa se remonta al gobierno brasileño de Fernando Henrique Cardoso, que ya con la primera cumbre sudamericana en el año 2000 perseguía el objetivo de promover la convergencia de los bloques comerciales CAN y MERCOSUR y de mejorar la competitividad mediante proyectos conjuntos de infraestructura.

Bajo el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se agregó el interés por crear un contrapeso a los EEUU y su proyecto ALCA. Presumiblemente se debe a ese motivo que la declaración fundacional de la CSN se diferencie – al menos retóricamente – del dogmatismo de libre comercio neoliberal. Partiendo de valores comunes como la democracia, los derechos humanos y la justicia social, los estados miembros de la CSN declaran que el desarrollo económico y social "no puede reducirse sólo a políticas de crecimiento sostenido de la economía." Más bien habría que reconocer las "asimetrías" entre los países y asegurar "una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente".⁴ Además dice que los jefes de estado con la fundación de la comunidad de naciones siguen el ejemplo de los próceres de la unidad de "la gran Patria Americana", Bolívar, Sucre y San Martín.

Los países miembros de la CSN/UNASUR no han firmado hasta el momento un tratado recíproco, sólo se han limitado a hacer una serie de declaraciones. A pesar del poco compromiso formal, la CSN/UNASUR ha ganado importancia por el programa conjunto de infraestructura que viene de mucho antes. Ya durante su primera cumbre en 2000 los gobiernos sudamericanos acordaron llevar adelante la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA). Esta iniciativa prevé amplias inver-

³ 'Presidente Chávez: Mercosur debe priorizar la agenda social', Ministerio de Estado para la Integración y el Comercio Exterior, Comunicado de Prensa, Caracas, 20 de abril de 2006.

⁴ Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, III Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004.

siones en la infraestructura transfronteriza en materias de transporte, energía y telecomunicaciones.

Organizaciones no gubernamentales, sin embargo, critican que una gran parte de proyectos en el marco de IIRSA no cuadren con las palabras bonitas de la Declaración de Cuzco. A pesar de constatar la deficiente infraestructura que une a los países, se critica la "economía de puertos" de IIRSA, que tiene por objetivo seguir con la explotación de recursos naturales del continente en beneficio de empresas transnacionales. La diferencia sería, que esos megaproyectos convencionales ahora se presentan como elemento de una integración regional autónoma.⁵ Además, la CSN solamente buscaría incorporar las normas de libre comercio de MERCOSUR y CAN para unificar y perfeccionarlas, sin querer superarlas teniendo como perspectiva una alternativa social.⁶

2.3 Escepticismo: La respuesta de la sociedad civil

La crítica de las organizaciones no-gubernamentales se basa en el escepticismo de la sociedad civil frente a las iniciativas integracionistas actuales. El sociólogo venezolano Edgardo Lander, por ejemplo, advierte que la "retórica latinoamericanista", es decir el hecho que la integración sea por iniciativa latina- o sudamericana, no garantiza por sí una utilidad para la población en general. Aboga por revisar los modelos de cada pacto: "¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de qué valores se diseña?"⁷ Dependería de la respuesta a cada una de esas preguntas si las iniciativas integracionistas refuerzan los modelos de dominación existentes o si pueden servir para superarlos.

Mientras que las políticas nacionales acepten la división social y privilegien a intereses del capital transnacional, la integración no cambiará nada. Que el ALCA haya sido frenado, a fin de cuentas también es resultado del hecho de que Argentina y Brasil no han podido obtener concesiones suficientes para su agroindustria exportadora.

En este sentido, según el académico y activista mexicano Alberto Arroyo, no debería ser tarea de los movimientos sociales el "escoger entre alguna de las propuestas que vienen de los gobiernos progresistas del Mercosur, de Venezuela o de Bolivia". Más bien el desafío sería el de someter a la discusión modelos de integración propios. Para lograr ese fin "el movimiento social debe mantener su autonomía frente a cualquier gobierno, aún frente a aquellos que son fruto de la propia lucha social". Esto no excluiría un apoyo mutuo en caso de concordancias. La elaboración de modelos propios, sin embargo, sería imprescindible: „Sólo el pueblo salva al pueblo."⁸

Arroyo aduce además la diversidad entre los gobiernos latinoamericanos, de los cuales sólo algunos, y en distinta medida, rechazaron someterse al proyecto estadounidense. Otros, en cambio, han firmado tratados de libre comercio con los EE.UU: México desde 1994 es miembro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA); Chile firmó un acuerdo bilateral con los EEUU en 2002; los países centroamericanos Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana le siguieron en el 2004 con el tratado CAFTA; y últimamente Colombia y Perú han seguido a esta tendencia. Por eso habría que considerar las distintas dinámicas en la discusión sobre una integración alternativa en Latinoamérica.

2.4 Tratados de libre comercio: la respuesta europea y estadounidense

Según Alberto Arroyo, mientras que algunos estados firmen o planifiquen individualmente acuerdos de libre comercio neoliberales con los EEUU u otros países industrializados, es imposible llegar a cualquier forma de integración alternativa con ellos.⁹ Los acuerdos de libre comercio impiden el fomento de industrias propias y la defensa del sector agrícola en contra de productos *dumping* altamente subvencionados por el Norte. Por el contrario obligan a brindar un acceso a mercados sin discriminación, al tratamiento igualitario

⁵ Véase 'Otra Integración es Posible y Está en Marcha: La Iniciativa de los Gobiernos y las Instituciones Financieras Internacionales para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Una Crítica Preliminar por la Perspectiva de la Sociedad Civil'. Bank Information Center, Coalición Ríos Vivos, Núcleo Amigos de la Tierra-Brasil, junio de 2004.

⁶ Judith Valencia, '¡Comunidad suramericana no puede ser un camino al ALCA!'. En: América Latina en movimiento, número 414-415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 5-7.

⁷ Edgardo Lander, '¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y resistencias populares'. En: OSAL, año V, número 15, septiembre/octubre 2004, p. 45-56.

⁸ Alberto Arroyo, 'Reflexiones ante la Cumbre de Cochabamba'. En: América Latina en movimiento, número 414-415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 22-24.

⁹ Ibid.

de empresas nacionales y extranjeras y a la protección de inversiones extranjeras y de propiedad intelectual. Con esto obstruyen la posibilidad de transitar por caminos propios de desarrollo hacia zonas de integración de la periferia.

La Unión Europea también está echando sus redes en Latinoamérica. Su instrumento son los acuerdos de asociación bilaterales con los tres pilares: diálogo político, cooperación para el desarrollo y libre comercio.

Con México y Chile ya se han firmado acuerdos bilaterales de asociación. Con el MERCOSUR desde 1999 se están teniendo conversaciones acaloradas, con la comunidad centroamericana de integración SICA hay negociaciones desde mayo del 2006 y con la Comunidad Andina se acordó el inicio de negociaciones para enero del 2007. Al mismo tiempo hay conversaciones con el grupo caribeño CARICOM sobre un controvertido "acuerdo de asociación económica" en el marco de la reorganización de las relaciones comerciales con los estados del Grupo ACP.

El pilar „libre comercio" claramente domina a los acuerdos de asociación de la UE y sigue el mismo esquema que los tratados estadounidenses. Aparte de reducir aranceles para casi todas las mercancías, la UE exige la liberalización de servicios, inversiones y compras gubernamentales. El MERCOSUR es de alto interés estratégico para la UE, ya que – a

diferencia que en el resto de América Latina – en el MERCOSUR empresas europeas han podido conquistar cuotas de mercado similares a sus competidores de EEUU en los áreas de comercio e inversión directa.¹⁰

En este sentido las negociaciones de libre comercio de la Unión Europea con Latinoamérica arrojan más luz sobre las contradicciones de las nuevas pretensiones integradoras. Ya que los miembros del ALBA Bolivia y Venezuela rechazan rotundamente los tratados de libre comercio de los EEUU, sin embargo a la vez negocian, en el marco de su respectiva afiliación en CAN y MERCOSUR, con la UE acuerdos de asociación basados en principios de competencia, que contradicen completamente a las ideas del ALBA y del TCP.

Lo mismo vale para la entrada de Venezuela – y a futuro también de Bolivia – al MERCOSUR. Ni Venezuela ni Bolivia están a la altura de la competitividad de la economía brasileña. Hasta ahora, sin embargo, el MERCOSUR no dispone de ningún mecanismo satisfactorio que atienda a las asimetrías existentes entre sus miembros.

Además, es incierto si la exigencia de Hugo Chávez de un MERCOSUR „social" y „solidario" se pueda materializar a mediano plazo. Por lo tanto, habrá que preguntarse por la consistencia de los conceptos alternativos de Venezuela y Bolivia bajo sus propuestas del ALBA y del TCP.

3 ALBA: la Alternativa Bolivariana

Hugo Chávez mencionó la idea del ALBA por primera vez en el 2001 en una conferencia de estados caribeños. Sin embargo, se materializó recién después que su gobierno lograra superar a las ofensivas de desestabilización de la oposición conservadora: el golpe de estado de dos días contra Chávez en abril del 2002, la huelga en la empresa estatal de petróleo, PDVSA, iniciada el mismo año por la derecha, así como el referendo sobre la destitución de Chávez, que fracasó en agosto del 2004. El ALBA, por lo tanto, también es reflejo de la consolidación de la "Revolución Bolivariana", proclamada por Venezuela.

La propuesta en sí no contiene un programa detallado ni un "plan maestro" de la integración latinoamericana. Más bien

desde algunos comunicados oficiales se pueden deducir en primera línea una serie de principios, que se llevan a la práctica por medio de diversas cooperaciones entre estados. Estos principios, que son muy diferentes a los del ALCA, son los siguientes:

- A diferencia de la integración neoliberal, que da prioridad a la liberalización de comercio e inversiones, el ALBA se centra en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
- Se le otorga una alta importancia a los derechos humanos, los derechos laborales y los derechos de la mujer y a la protección del medio ambiente.

¹⁰ Con respecto a las negociaciones de la UE con Centroamérica y con la Comunidad Andina véase: Ronald Köpke, 'Implicaciones de los acuerdos comerciales de la Comunidad Europea con Centroamérica y los Países Andinos', FDCL, diciembre de 2006, Berlín. Con respecto a las negociaciones con el MERCOSUR véase: Thomas Fritz, 'Um mau negócio. O Acordo de Cooperação Interregional entre o Mercosul e a União Européia, documento de trabajo de BLUE 21, 6 de octubre de 2004, Berlín, como también: Christian Russau, 'Enforcement of international trade regimes between the European Union (EU) and the Common Market of the South (MERCOSUR)?', FDCL, Berlín, enero de 2004.

- La agricultura también ocupa un lugar importante. La lucha en contra del proteccionismo y las subvenciones agrícolas del Norte no cuestiona a la vez el derecho de países en vías de desarrollo a proteger su agricultura campesina. Millones de personas en áreas rurales se verían afectadas por una inundación de productos agrícolas importados.
- El ALBA quiere eliminar las causas de bloqueos de la integración: la pobreza, las asimetrías entre los países, el intercambio desigual, la deuda impagable, la imposición de programas de ajuste y de reglas comerciales rígidas, la monopolización de los medios de comunicación y el impedimento de transferir conocimiento y tecnología debido a los tratados de propiedad intelectual.
- El ALBA se contrapone a las llamadas „reformas“ que tienen por objetivo la desregulación y la privatización de los servicios públicos. En lugar de eso habría que fortalecer al estado y promover la participación ciudadana en asuntos públicos.
- Contrario a la apología del libre comercio, que promete llevar automáticamente a crecimiento y bienestar, se requeriría de intervenciones estatales para reducir las disparidades entre países. La libre competencia entre desiguales solo serviría a los más fuertes.
- La profundización de la integración latinoamericana requeriría de una agenda económica definida por los estados soberanos – libre de influencias nocivas de organizaciones internacionales.
- Los principios guías de “cooperación, solidaridad y complementariedad”, que deberían posibilitar un “desarrollo endógeno” de las naciones participantes, sirven como referencia central del ALBA.¹¹

ALBA quiere desarrollar mecanismos de cooperación que ayuden a eliminar las asimetrías entre estados. Los países menos desarrollados deberían mejorar sus capacidades productivas con su ingreso al ALBA y así reducir la distancia

hacia las economías mas avanzadas de la región. Deberían recibir un trato especial y diferenciado basado en sus necesidades económicas y sociales. Con ésto Venezuela hace referencia al concepto de política comercial y de desarrollo “trato especial y diferenciado” que se ha degenerado sustancialmente con la fundación de la OMC.¹²

Para apoyar a este concepto, Venezuela propone la creación de así llamados “fondos de convergencia estructural”, que recuerdan a los fondos estructurales de la Unión Europea. Por lo pronto se han creado una serie de fondos en el marco del acuerdo Petrocaribe y del tratado ALBA-TCP.¹³

3.1 La alianza Bolivariana tripartita

Con el acuerdo entre Venezuela y Cuba de diciembre del 2004 y el ingreso de Bolivia al ALBA el 29 de abril del 2006, se ha dado comienzo a la materialización de los principios de la Alternativa Bolivariana de las Américas.

3.1.1 Cooperación venezolana-cubana

Con la firma del tratado ALBA por el jefe de estado cubano Fidel Castro y el presidente venezolano Hugo Chávez ambas partes acordaron pasos concretos de liberalización así como una serie de proyectos de cooperación económicos y sociales.¹⁴

El intercambio de bienes y mercancías puede llevarse a cabo en forma de un negocio de compensación, si esto es de utilidad mutua. Cuba elimina a todos sus aranceles y sus barreras no tarifarias para productos venezolanos, mientras que Venezuela elimina barreras no tarifarias para mercancías y servicios cubanos.¹⁵ Inversiones de empresas estatales y mixtas estarán liberadas del pago de impuestos a las utilidades, hasta amortizarse la inversión. Cuba renuncia a su participación en filiales cubanas de empresas estatales venezolanas, es decir le concede a los venezolanos una propiedad del cien por ciento.

¹¹ Véase el texto base : ‘Qué es el ALBA?’, www.alternativabolivariana.org. En este sitio web se pueden encontrar una serie de documentos oficiales del ALBA.

¹² Para más detalles véase: Thomas Fritz, ‘Special and differential treatment for developing countries. Heinrich-Böll-Stiftung/Germanwatch, Global Issue Paper, núm. 18, Berlín, julio de 2005.

¹³ También en el MERCOSUR en 2005 se acordó crear un fondo de ese tipo. Sin embargo, aún no se ha materializado el FOCER (Fondo de Conversión Estructural del Mercosur) por una serie de riñas y discrepancias. Se prevé los primeros flujos financieros para 2007.

¹⁴ Acuerdo entre el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela y el Presidente del Consejo de Estado de Cuba, para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, La Habana, 14 de diciembre de 2004.

¹⁵ Por sus obligaciones en el marco de su membresía en la Comunidad Andina (CAN) y su futura membresía en el MERCOSUR, entre otros, Venezuela no pudo acordar una eliminación unilateral de sus barreras arancelarias hacia Cuba. Por eso se acordó una ampliación de las preferencias arancelarias existentes a 104 grupos de productos y un plan para reducir los aranceles. Véase : Declaración Final de la Primera Reunión Cuba-Venezuela para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, La Habana, 28 de abril de 2005.

En cuanto a los proyectos de cooperación, un aporte central cubano está en los sectores de servicios de la salud y de la educación. Venezuela, en cambio, ofrece transferencias de tecnología y financiamiento en los sectores de energía y de infraestructura. Además, le provee a Cuba de petróleo a términos preferenciales. Estos, sin embargo, forman parte de otros tratados (por ejemplo de la iniciativa Petrocaribe, véase capítulo 4.3.1.).

El apoyo cubano a las „misiones“ de los sectores de la salud y de la educación le confirió un alto significado simbólico al tratado. En el marco de la estrategia conjunta para la implementación del ALBA, acordada en abril del 2005, Cuba se comprometió a enviar hasta 30.000 profesionales de la salud a la misión „Barrio Adentro“ que brinda atención primaria en salud. En el marco de la misión „Ribas“, 10.000 estudiantes reciben una beca para estudiar carreras médicas en Cuba. Y se acordó tratar en Cuba a hasta 100.000 venezolanos con enfermedades de la vista durante el 2005. Además, el gobierno de Castro apoya a la misión “Robinson” en la alfabetización y educación escolar.

Venezuela, en cambio, se comprometió a brindar cursos de formación a 45.000 médicos cubanos y ofreció una serie de becas. Ambos países acordaron también trabajar conjuntamente en programas de salud y de alfabetización en terceros países.¹⁶

Para Cuba la alianza ALBA es de especial importancia. Desde los años sesenta la isla socialista sufre un embargo comercial por parte de los EEUU. La suspensión de la ayuda soviética en los noventa llevó a una profunda crisis económica, de la que sólo ha podido recuperarse lentamente. Venezuela, en cambio, ha expresado inequívocamente con esta alianza, que el ALBA representa una alternativa explícita a todos los tratados de libre comercio estadounidenses.

3.1.2 El ingreso de Bolivia: un ‘Tratado de Comercio de los Pueblos’

El ingreso de Bolivia al ALBA mostró la capacidad expansiva de la Alternativa Bolivariana – un proceso que continuó con la afiliación de Nicaragua y posiblemente proseguirá con el ingreso de Ecuador. Con el concepto del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) el presidente boliviano además ha

aportado bases ideológicas propias a la alianza, que también se reflejan a nivel formal. El tratado tripartito ahora prevé la aplicación tanto de la Alternativa Bolivariana como del Tratado de Comercio de los Pueblos.¹⁷

La propuesta TCP es bastante similar a los principios del ALBA, sin embargo se basa más fuertemente en una crítica al modelo neoliberal de desarrollo, al cual se contraponen modalidades de producción cooperativistas e indígenas. El comercio debería servir para “el fortalecimiento de los pequeños productores, microempresarios, cooperativas y empresas comunitarias”. Por lo tanto, habría que limitar los derechos de los inversores. A fin de defender a la “cultura indígena”, el Tratado de Comercio de los Pueblos postula “la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado que homogeneiza los patrones de consumo”. Con el TCP se quiere lograr una integración que “trascienda los campos comercial y económico” y que lleve a un “desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios.”¹⁸

Algunas de esas exigencias son consideradas en el tratado ALBA-TCP. El tratado sobre todo refleja las asimetrías entre los tres partidos. Así, los aportes bolivianos son bastante modestos comparado con los de Cuba o Venezuela. Cuba le ofrece a Bolivia el establecimiento de seis centros oftalmológicos, incluyendo el equipamiento y el gasto del personal cubano. Además construirá 20 hospitales de campaña y pone a disposición 600 médicos y enfermeros. A estudiantes bolivianos se les ofrecerán 5000 becas para estudiar medicina en Cuba, y Cuba apoyará a la campaña boliviana de alfabetización con tecnología y material didáctico.

Venezuela suministra petróleo, combustible y asfalto, y parte de la cuenta podrá ser pagada con productos bolivianos. Además le ofrece cooperación y ayuda tecnológica a las dos empresas estatales bolivianas de los sectores petróleo y minero, YPFB y Comibol. Además, provee a un fondo boliviano que financia a inversiones productivas con 100 millones de dólares y dona 30 millones de dólares para fines sociales.

¹⁶ Declaración Final de la Primera Reunión Cuba-Venezuela para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas, La Habana, 28 de abril de 2005.

¹⁷ Acuerdo para la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, La Habana, 29 de abril de 2006.

¹⁸ ‘TCP: la propuesta boliviana para un comercio justo entre los pueblos’, Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración solidaria de los pueblos, 13 de abril de 2006.

3.1.3 Consideración de las asimetrías

El aporte material boliviano es mucho menos evidente. Sus exportaciones de minerales y productos agrícolas aportarían al tratado ALBA-TCP, según se afirma. Su industria petrolera promovería la "seguridad energética" de los países miembros. Además, ofrece sus experiencias para el estudio conjunto de los pueblos indígenas, la medicina natural y la biodiversidad.¹⁹ La modestia del aporte boliviano se pone en evidencia en la industria petrolera: De hecho, Bolivia no exporta su gas ni a Venezuela ni a Cuba.

Cuba y Venezuela, entretanto, están expandiendo sus concesiones comerciales mutuas a Bolivia. Las exportaciones bolivianas a esos dos países se benefician de liberalizaciones de aranceles y de medidas no-tarifarias acordadas previamente por Venezuela y Cuba.²⁰

Bolivia, en cambio, no se ha comprometido a bajar sus aranceles. Aquí se refleja también la preocupación por la asimetría entre las tres partes. La única obligación de liberalizar en forma no-tarifaria que ha asumido Bolivia se refiere a preferencias impositivas para inversiones de empresas estatales cubanas y venezolanas en Bolivia. Estas empresas estarán exentas de impuestos a las ganancias hasta amortizarse la inversión. Una obligación similar ha sido adquirida por Venezuela y Cuba.

Además de eso, Cuba y Venezuela hacen otra concesión comercial: Garantizan comprar los productos de exportación bolivianos cuyos mercados de destino desaparecen por efecto de tratados de libre comercio de EEUU o la UE con estados vecinos de Bolivia. Esto representa una reacción directa a la firma de tratados de libre comercio con EEUU por parte de Colombia y Perú. Hasta ahora Bolivia ha exportado alrededor de un tercio de su producción de soja estos dos países. Con la firma del tratado con los EEUU estos, sin embargo, se comprometen a abrir sus mercados agrícolas sucesivamente hacia el agrobusiness estadounidense, que es altamente subvencionado. Como la soja boliviana no puede competir con la soja barata de los EEUU, se espera que Bolivia pierda una parte de sus mercados andinos.²¹

Cuba y Venezuela ahora se comprometen a compensar estas pérdidas comprando las respectivas cantidades de soja boliviana. Venezuela hoy en día ya compra la mitad de las exportaciones bolivianas de soja.

3.2 Alianzas de empresas estatales

Con el fin de incorporar a más países al proyecto ALBA, el gobierno venezolano apuesta sobre todo a cooperaciones entre empresas públicas o a la creación de nuevas empresas públicas conjuntas. Un ejemplo sobresaliente de esto es la visión de una alianza continental de empresas energéticas estatales, „Petroamérica". En el marco de las tres iniciativas subregionales Petrocaribe, Petroandina y Petrosur, PDVSA está comenzando paso a paso a poner en práctica esa visión. La iniciativa más ambiciosa en este sentido sería la construcción de un gasoducto trans-sudamericano propagado por Venezuela. Según el presidente Hugo Chávez el „Gran Gasoducto del Sur" se convertirá en "locomotora" de una nueva forma de integración (véase capítulos 4.3 y 4.4).

Igualmente de gran importancia económica es el plan de crear un banco de estados latinoamericanos, el "Banco del Sur". Éste daría créditos para proyectos infraestructurales bi- o multilaterales, sin las imposiciones fastidiosas del Banco Mundial, del FMI o de otros bancos de desarrollo. La coyuntura para este proyecto está bastante favorable, dadas las altas reservas de divisas de muchos estados exportadores de la región. Venezuela ha anunciado que está dispuesto a poner a disposición una parte de sus reservas para ese fin.

El país ya está tomando las primeras medidas al respecto. La compra de bonos estatales argentinos y bolivianos se considera como semilla de un banco latinoamericano. Desde mayo del 2005 Venezuela ha adquirido bonos argentinos por alrededor de tres mil millones de dólares. Esto le facilitó a Argentina la amortización anticipada de su deuda con el FMI de 9,800 millones de dólares. En julio del 2006, finalmente ambos países anunciaron la emisión de un bono conjunto. Esto representaría "el preinicio de un Banco del Sur", según el presidente argentino Néstor Kirchner.²²

¹⁹ Véase pie de página núm. 17.

²⁰ Cuba exime a productos venezolanos de aranceles, Venezuela sin embargo por sus obligaciones en el marco de CAN y del MERCOSUR solo puede brindar preferencias limitadas. Véase también pie de página núm. 15.

²¹ Una parte de las exportaciones de soja bolivianas a Venezuela, Colombia y Perú sin embargo proviene ilegalmente de Brasil y Paraguay. Esta soja es ingresada a Bolivia para exportarla a países de la Comunidad Andina, para así obtener preferencias arancelarias que Bolivia tiene como miembro de la CAN. Véase: FOBOMADE, 'Soya boliviana, mercado colombiano, transgénicos y TLC', Foro Boliviano Sobre Medioambiente Y Desarrollo, 24 de marzo de 2006.

²² 'Chavez firmó el ingreso de su país al Mercosur. Con un bono conjunto, Kirchner afianza su sociedad con Venezuela', Clarín, 5 de julio de 2006.

Venezuela, con el ingreso de Bolivia al ALBA, además se comprometió a comprar bonos estatales bolivianos por un valor de 100 millones de dólares. Estos dineros formarían parte de un fondo de desarrollo para la pequeña y mediana empresa, que sería administrado por el Banco del Sur.²³ Los intereses que Argentina y Bolivia le pagan a Venezuela están por debajo de los intereses de los mercados internacionales de bonos.

Otro ejemplo de una empresa estatal conjunta, guiada por los principios del ALBA, es el canal de televisión "TeleSUR". Éste transmite desde mediados del 2005 y representa una alternativa a los medios conservadores del continente, especialmente a los canales noticieros estadounidenses CNN o Univisión o la BBC británica. Cinco países administran el canal televisivo en lo económico y son responsables de la programación. La propiedad de la sociedad se reparte entre Venezuela (46%), Argentina (20%), Cuba (19%), Uruguay (10%) y Bolivia (5%). Los programas se realizan en diferentes países, por una red de corresponsales propios. Varios intelectuales latinoamericanos e internacionales forman parte del consejo de la emisora, entre otros el premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y los autores Ernesto Cardenal, Eduardo Galeano, Tarik Ali e Ignacio Ramonet.²⁴

3.3 La relación con los movimientos sociales

Los proyectos integracionistas del ALBA, sin embargo, no se limitan a empresas estatales. También existe la intención de incluir en la Alternativa Bolivariana iniciativas surgidas desde los movimientos sociales, grupos de base o sindicatos. Un ejemplo de ese esfuerzo es el encuentro latinoamericano de empresas recuperadas, realizado en Caracas en octubre del 2005. Trabajadores y trabajadoras que tienen el control de sus empresas, que fueron abandonadas o llevadas a la quiebra por sus dueños, acordaron en ese encuentro dar los primeros pasos para el apoyo mutuo, entre otros la transferencia de tecnologías, la capacitación y el comercio. Tomaron parte en el evento unos 700 delegados, la mitad de ellos argentinos, de 250 empresas autogestionadas. El encuentro

se realizó a iniciativa del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) de Argentina, de la federación de sindicatos venezolanos UNT y de la central de sindicatos uruguayos PIT-CNT.

El gobierno venezolano apoyó plenamente el evento. Hugo Chávez propuso la creación de una red regional de empresas recuperadas bajo el nombre Empresas Recuperadas del Sur (EMPRESUR). Además anunció la instalación de un fondo, con un capital inicial de 5 millones de dólares, encargado de dar préstamos ventajosos a las empresas autogestionadas.²⁵

Las visiones del presidente venezolano van más allá de los nichos de economía solidaria. De EMPRESUR, según Chávez, podrían "nacer empresas multinacionales, pero dirigidas por obreros". Con estas palabras supo cautivar a los participantes del encuentro. El delegado uruguayo Marcelo Abdala indicó, que los trabajadores, mediante la recuperación de sus empresas, se están "preparando para dirigir la sociedad". Las empresas autogestionadas no deberían ser consideradas como islas: „La empresa que apuntamos a recuperar son nuestros países enteros.”²⁶

Una expresión de la relativa transparencia del proyecto ALBA constituye el hecho de que esa propuesta haya sido discutida y enriquecida con una serie de ideas en diversos foros en Venezuela y otros países. Y en ese marco se puede advertir que existen diferentes visiones sobre lo que es o debería ser el ALBA. Algunos autores, además, consideran la propuesta como un incentivo para diseñar diferentes concepciones modelos del ALBA.

Un resultado de esas discusiones, por ejemplo, es presentado por la organización chavista "Congreso Bolivariano de los Pueblos" en el documento "Construyendo el Alba desde los Pueblos."²⁷ Este documento presenta una serie de medidas institucionales en más de 20 áreas como la educación, salud, participación, migración, hasta áreas como el militar y el de la geopolítica. Sin embargo, el texto carece de una discusión de las condiciones políticas para materializar a todas las redes continentales, comisiones e instituciones propuestas.

²³ 'Chávez compra bonos del Tesoro por \$us 100 millones', La Prensa, 27 de mayo de 2006.

²⁴ Véase: Búsqueda 'TeleSUR', Wikipedia, enciclopedia libre.

²⁵ Daniel Badenes, 'Chávez propone formar una red de empresas recuperadas del Sur', Argenpress.info, 28 de octubre de 2005.

²⁶ *Ibíd.*, pie de página 25.

²⁷ 'Construyendo el ALBA desde los pueblos. Una propuesta de unidad para los pueblos de Nuestra América', Secretaría de Organización, Congreso Bolivariano de los Pueblos, 2005.

3.3.1 La idea de la participación

Las descripciones del proyecto ALBA, como se nota en el documento del „Congreso Bolivariano de los Pueblos”, muchas veces se refieren a los pueblos de Latinoamérica, de los cuales provendría la propuesta integradora. En este sentido, sin embargo, aspiraciones y realidades todavía difieren bastante.

La economista venezolana Judith Valencia, por ejemplo, opina que la idea del ALBA toma vida recién “cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado”. ALBA surgió como fenómeno social cuando la gente tomó las calles entre abril del 2002 y marzo del 2003, para protestar por la reinstalación de Chávez y en contra de los actos de sabotaje en PDVSA. Con la “reconquista del terreno político” el colectivo rebelde creó la posibilidad de convertir los „planes del gobierno en tareas del pueblo protagonista”. El ALBA sería entonces un „proceso social en el que los pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios”. En consecuencia, también los tratados interestatales, por los cuales Venezuela suministra petróleo a sus vecinos latinoamericanos bajo condiciones preferenciales, serían una expresión de la „solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre los pueblos”.²⁸

Seguramente el apoyo a Chávez por parte de grandes sectores de la población sea un factor importante para el avance de la revolución Bolivariana y del proyecto ALBA. Sin embargo, al parecer no hubo una participación directa de la población en los tratados interestatales. En un ensayo escrito para la Alianza Social Continental y la organización Focus on the Global South, Diego Azzi y David Harris constatan una brecha entre el discurso y la práctica en la construcción del ALBA. Hay referencias al pueblo, “pero lo que constituye la existencia concreta del ALBA son los acuerdos interestatales, firmados por tres jefes de gobierno”. Una “participación directa de la población en la elaboración de estos tratados es escasamente visible”.²⁹

Sin embargo, los autores a la vez opinan que entre los movimientos sociales „existe consenso al respecto del contenido de las propuestas de Chávez”. Como prueba de eso aducen el hecho que ALBA haya recogido a una parte importante de las propuestas alternativas de la Alianza Social Continental.

Hay que estar de acuerdo con los autores, que una amplia participación en los acuerdos interestatales del ALBA sea poco reconocible. Sin embargo, hay que poner en duda la afirmación de que las propuestas de Chávez tengan consenso en el movimiento social. Especialmente en el ámbito de los proyectos energéticos – centrales para el ALBA – hay una serie de voces críticas que no se deberían omitir.

4 En foco: La integración energética

La integración energética de Latinoamérica y el Caribe juega un rol sobresaliente en el marco del ALBA. La decisión, con la que el gobierno venezolano lleva adelante un gran número de proyectos energéticos en los últimos años, se explica desde la amenaza que habría significado la zona de libre comercio panamericana ALCA para cualquier forma de suministro público de energía.

Por lo tanto, para el gobierno venezolano no solamente se trata de diversificar los mercados para su petróleo ganando clientes latinoamericanos. Más bien aspira a un proceso de transformación, que sucesivamente limite el rol de las multinacionales petroleras en Latinoamérica para retomar

el control público de todo el sector energético, después de las privatizaciones de los años noventa.

4.1 Nacionalización en Venezuela

Este proceso de transformación fue iniciado por el gobierno de Hugo Chávez a finales del 2004 en el sector petrolero venezolano. Esta nueva fase de la “soberanía total” de la industria petrolera nacional es para revertir sucesivamente la apertura al sector privado de la industria del petróleo, realizado durante los años noventa.

En el marco de esta apertura, el gobierno había acordado un

²⁸ Judith Valencia, ‘El Alba elabora filosofía. Aspectos Filosóficos y Constitucionales del Alba’, Primer encuentro por la Consolidación de un Nuevo Estado de Derecho y de Justicia Social en el Marco de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), Barquisimeto, septiembre de 2005.

²⁹ Diego Azzi/David Harris, ‘ALBA – Venezuela’s answer to ‘free trade’: the Bolivarian alternative for the Americas’. Alianza Social Continental/Focus on the Global South (ed.), São Paulo/Bangkok, octubre de 2006, pp.13.

total de 32 contratos de extracción con empresas transnacionales, los llamados "convenios operativos". Aparte de eso, se realizaron inversiones privadas en forma de "asociaciones estratégicas". Se trata de cuatro empresas conjuntas para la extracción de petróleos pesados en la Faja del Orinoco, donde la estatal PDVSA solamente tuvo participación minoritaria. Como consecuencia, el estado, a través de la apertura, no solamente perdió el control sobre la extracción de petróleo, sino también perdió ingresos substanciales, ya que para estimular la inversión privada se habían bajado los impuestos y tributaciones dramáticamente.³⁰

Para revertir este proceso de apertura, el gobierno de Chávez exigió la conversión de todos los contratos de extracción en "empresas mixtas" donde la PDVSA tiene una participación mayoritaria de al menos 51%. Además, se elevaron los tributos sobre la producción, para que el estado obtenga al menos el 50% del valor de mercado. La mayoría de las empresas transnacionales se sometió a estas condiciones nuevas. 16 consorcios firmaron contratos nuevos y solamente la empresa francesa Total y el consorcio italiano Eni se negaron a firmar.

Las asociaciones estratégicas para la explotación del petróleo del Orinoco también se convertirán en "empresas mixtas" bajo propiedad mayoritaria de PDVSA. Expertos calculan los yacimientos de la Faja del Orinoco en unos 235 mil millones de barriles de petróleo pesado. Si esto se suma a los 77 mil millones de barriles de reservas de petróleo confirmados, Venezuela contaría con yacimientos de más de 300 mil millones de barriles – los más grandes del mundo. Sin embargo, la producción del petróleo pesado es bastante costoso y recién es rentable, si el precio del petróleo supera los 40 dólares por barril.³¹

Las nacionalizaciones venezolanas contradecían cada vez más las ambiciones de los EEUU en el marco de las negociaciones sobre el ALCA. Como parte del paquete negociador, los Estados Unidos dieron inicio a la Iniciativa Energética Hemisférica (IEH), que se basa en una política de liberalizaciones y privatizaciones. Su orientación central consiste en la "apertura de mercados y transformación de los estados productores en estados normadores, fiscalizadores y regu-

ladores". El estado reducido a su función reguladora debería dejar "los sectores productivos en manos privadas". La IEH entiende la integración energética como "proceso gradual facilitado por la eliminación de obstáculos y la armonización de marcos regulatorios que posibiliten normas transparentes para los inversores"³²

La iniciativa energética del ALCA, sin embargo, con su énfasis en las privatizaciones no solamente entra en conflicto con el rumbo nacionalizador de Venezuela. En Latinoamérica, es justamente el área energética donde dominan empresas estatales o controladas por el estado. Aparte de la PDVSA venezolana están, sobre todo, la PEMEX en México y Petrobras en Brasil. En estos tres países se concentra el 79% de la producción latinoamericana de petróleo.³³ En total hay 15 países del subcontinente que cuentan con una petrolera estatal.

4.2 La vuelta del Estado

No solamente en Venezuela, sino también en Argentina y Bolivia se desarrolló una tendencia opuesta a la Iniciativa Energética Hemisférica. Después de haber sido vendida la estatal YPF, en los noventa, a la transnacional española Repsol, el gobierno de Néstor Kirchner, en el 2004, efectuó una vuelta de timón. A partir de la grave crisis de abastecimiento creó una nueva petrolera estatal, ENARSA (Energía Argentina S.A.).³⁴

En forma similar, el gobierno de Evo Morales, después de nacionalizar la industria del petróleo y del gas en mayo del 2006, se aprestó a refundar la empresa estatal YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos).³⁵ Ecuador también está actuando más decididamente frente a las multinacionales petroleras. En mayo del 2006 canceló el contrato de extracción con la Occidental Petroleum, después de que esa empresa violara una serie de disposiciones estatales.

Los proyectos del ALBA, en este sentido, son una reacción directa frente a la Iniciativa Energética Hemisférica, que pretende preparar el terreno para la privatización de las empresas estatales. El ALCA, además, habría cerrado el paso

³⁰ Véase: 'Auténtica Nacionalización', 'Convenios operativos: Concesiones disfrazadas' y 'Asociaciones estratégicas?', www.pdvsa.com

³¹ Michael Piskur, 'Venezuela Moves to Nationalize its Oil Industry', Power and Interest News Report (PINR), 19 de mayo de 2006.

³² Citado en: Eduardo Mayobre, 'La propuesta Petroamérica y la Integración Energética de América Latina y El Caribe', Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), noviembre de 2005, pp. 40.

³³ *Ibíd.*, pie de página 32, p. 75.

³⁴ Marcela Valente, 'El estado se repliega dentro del mercado', Inter Press Service (IPS), Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.

³⁵ Véase: Thomas Fritz, 'Die Plünderung ist vorbei. Boliviens Nationalisierung der Öl- und Gasindustrie', FDCL, Berlín, septiembre de 2006.

a nivel continental a una perspectiva de ampliación de un control soberano sobre los recursos naturales.

Venezuela, por lo tanto, está utilizando el espacio ganado por el bloqueo del ALCA para retomar espacios de acción política en un sector de importancia creciente. Espacios que de otra forma se habrían perdido por un tiempo indeterminado. Con los proyectos energéticos del ALBA Venezuela está ofreciendo a nivel regional alternativas concretas al rumbo neoliberal privatizador.

Sin embargo, la pregunta central es, si con estas cooperaciones, que apuestan a las empresas estatales frente a las privadas, se llegará a un carácter distinto. ¿Se aplicarán realmente los principios formulados en el ALBA: cooperación, solidaridad y complementariedad? ¿Se respetarán los derechos humanos, el medio ambiente y la declarada participación?

4.3 Petroamérica: una visión latinoamericana

La iniciativa Petroamérica constituye el pilar energético del ALBA. Según la PDVSA se trataría de una „propuesta de integración energética de los pueblos del continente, enmarcada en la Alternativa Bolivariana para la América“.

El objetivo sería la „integración de las empresas energéticas estatales de América Latina y del Caribe“, para materializar inversiones conjuntas a lo largo de la cadena de valor del petróleo y del gas: desde la exploración pasando por la extracción hasta la comercialización. El „uso soberano de los recursos energéticos“ serviría como „motor de desarrollo endógeno y de integración“. El objetivo sería la reducción de las „asimetrías económicas y sociales“. La cooperación sería acordada por estados, regiones o empresas estatales y podría desembocar en la creación de empresas conjuntas.³⁶ Por otra parte, no están previstas cooperaciones entre empresas privadas ni la promoción de inversiones privadas por parte del estado. Sin embargo, tampoco se descarta explícitamente la participación de empresas transnacionales.

Petroamérica, a su vez, constituye el marco para tres iniciativas subregionales: Petrocaribe, Petrosur y Petroandina. Mientras que Petrocaribe actualmente comprende a 14 países del Caribe, Petrosur consiste de los países del MERCOSUR Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Petroandina aspira a la cooperación con los miembros de la Comunidad Andina CAN (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia). En las tres

regiones, entretanto, Venezuela o PDVSA han acordado proyectos conjuntos. Llama la atención, sin embargo, la ausencia de México, Chile y de la mayoría de los países centroamericanos (con la excepción de Belice y recientemente también Nicaragua).

El gobierno venezolano considera a Petroamérica como una iniciativa a largo plazo que podría desembocar en una federación de empresas estatales o incluso en un consorcio energético latinoamericano. Rafael Ramírez, ministro de energía venezolano y presidente de PDVSA, explicita la perspectiva: „Petroamérica no puede decretarse de la noche a la mañana. Por eso vamos construyendo acuerdos de cooperación en producción e intercambio tecnológico y logístico para que después el proyecto se concrete bajo alguna figura jurídica.“³⁷

4.3.1 Petrocaribe

El tratado Petrocaribe, que muchas veces sirve como referencia para la aplicación de los principios del ALBA, ha recibido mucha atención. Sin embargo, Petrocaribe no es nada nuevo. Más bien representa una continuación de acuerdos preferenciales que Venezuela ha firmado desde los años setenta con los países centroamericanos y caribeños.

Estos fueron motivados por los shocks en el precio del crudo del 1973 y 1979, que golpearon especialmente fuerte a aquellos países en vías de desarrollo que dependen de las importaciones. Por esta razón, ya en 1974 en el acuerdo de Puerto Ordaz, Venezuela concedió ayudas financieras a países centroamericanos y caribeños que importan petróleo venezolano. Una parte de la factura se podía cubrir a crédito. El monto de estos créditos dependía de la cantidad importada y del precio del crudo en el mercado mundial. Los créditos tenían una duración de seis años. Sin embargo, posteriormente se podían convertir en préstamos a largo plazo para el financiamiento de proyectos de desarrollo.

Con la firma del tratado de San José en 1980 México se hizo parte de este sistema, como cofinanciador. Venezuela y México se comprometieron a cubrir cada uno el 50% de la demanda de petróleo de los países beneficiados. La posibilidad de financiar a crédito se mantuvo y se hizo más restrictivo recién en 1982, después de la irrupción de la crisis de la deuda, que afectó a México y a Venezuela. Así, se redujo el porcentaje financiado a crédito del 50% al 20%. Además, desde entonces México y Venezuela exigían que

³⁶ Véase 'Petroamérica', www.pdvs.com

³⁷ Miguel Lora, 'Petroamérica, la estrategia sudamericana para recuperar su soberanía energética', *Rebelión*, 8 de junio de 2004.

los proyectos de desarrollo financiados con sus créditos contratasen a compañías mexicanas y venezolanas. Venezuela, por ejemplo, exigía que el 60% de los dineros gastados sea para empresas venezolanas. Esta obligación de comprar a los países donantes hasta entonces había sido vista como una práctica censurable de los países donantes del Norte. El tratado de San José sigue vigente hoy en día con algunas modificaciones.³⁸

En el 2000 Venezuela firmó el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas con diez países centroamericanos y caribeños.³⁹ Este tratado va más allá del Tratado de San José y posibilita financiamiento preferencial para mayores cantidades de petróleo. México ya no es parte de ACEC. El porcentaje de la factura para el cual Venezuela concede financiamiento a crédito depende del precio de crudo en el mercado mundial, según una escala progresiva: Si el precio supera a los 15 dólares por barril, el 5% de la factura puede ser financiado a crédito. Si supera a los 20 dólares el 10%. Si traspasa los 30 dólares Venezuela concede crédito por el 25% de la factura. El interés es del 2% y la amortización será en un plazo máximo de 15 años. Hasta un año podrá ser libre de amortización. El pago de intereses y de amortizaciones se puede realizar parcialmente en forma de negocios compensatorios.⁴⁰

4.3.2 Más que negocios petroleros preferenciales

Este sistema ya existente luego fue extendido a 13 países caribeños en el marco del Tratado Petrocaribe del 29 de junio del 2005, y las preferencias de los tratados de San José y Caracas fueron ampliadas.⁴¹

Ahora si el precio del petróleo supera a los 40 dólares por barril, Venezuela concede crédito por un 30% de la factura. A partir de 50 dólares el 40% y desde 100 dólares el 50% se podrá financiar a crédito. Dos años podrán pasar antes de la primera cuota de amortización. Si el precio del crudo supera a los 40 dólares, la duración del crédito se alarga hasta un máximo de 23 años, más los dos años sin amortización. La

tasa de interés en este caso baja del 2% al 1% (véase tabla en el anexo). Más detalles, como las cantidades acordadas, se fijan en acuerdos bilaterales entre Venezuela y el beneficiado.

Igual que lo estipulado en el tratado de Caracas, también Petrocaribe considera la posibilidad, que créditos sean amortizados parcialmente por negocios compensatorios. Venezuela acepta que una parte de los pagos sean realizados en forma de mercancías y servicios a precios preferenciales ofrecidos por los deudores. Las mercancías compensatorias podrán ser aquellas afectadas por medidas comerciales de países ricos.⁴² Con esto, Venezuela abre la posibilidad de una cierta disminución de las pérdidas que afectan a los exportadores caribeños de plátanos, azúcar y otras mercancías por medidas comerciales distorsionadoras de los países industrializados (por ejemplo mediante altos aranceles, cuotas, subvenciones, normas y estándares).

Petrocaribe, sin embargo, no se limita al comercio preferencial de petróleo. Más bien los 14 países miembros formaron una organización encargada de coordinar su política energética. El tratado describe a Petrocaribe como una "organización capaz de asegurar la coordinación y articulación de las políticas de energía", y eso en todos los ámbitos relevantes "incluyendo petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación tecnológica, capacitación, desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y otras".

A nivel institucional Petrocaribe dispone de un consejo ministerial y una secretaría ejecutiva, asentada en el ministerio de energía venezolano. A esto se agrega el fondo "Alba-Caribe", provisto por Venezuela de un capital inicial de 50 millones de dólares, destinado a financiar proyectos sociales y económicos.

Más allá, el tratado apunta explícitamente a una ampliación de la influencia estatal sobre el sector energético en los países miembros. El artículo VI, por ejemplo, dice: "En el

³⁸ Véase Eduardo Mayobre, pie de página 32, pp. 27.

³⁹ Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, Jamaica, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

⁴⁰ Pie de página 32, pp. 27.

⁴¹ Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, Puerto la Cruz, 29 de junio de 2005.

⁴² En el tratado bilateral entre Venezuela y Antigua y Barbuda dice por ejemplo: 'Para el pago diferido, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con productos, bienes y/o servicios, establecidos mutuamente, por los que el Gobierno de Antigua y Barbuda ofrecerá precios preferenciales. Los productos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela podría adquirir a precios preferenciales podrían incluir bienes y servicios que Las Partes determinen, y que puedan estar afectados por políticas comerciales de países ricos.', Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe entre el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el Gobierno de Antigua y Barbuda, Montego Bay, 6 de septiembre de 2005.

marco de PETROCARIBE se requerirá la existencia de entes estatales para la realización de las operaciones energéticas. Venezuela ofrece cooperación técnica para apoyar la constitución de entidades estatales en aquellos países donde no existan."

Para la implementación de medidas acordadas bajo Petrocaribe la PDVSA creó a la filial PDV Caribe. Ésta se encarga del transporte del petróleo y así elimina el comercio intermedio, lo que lleva a ahorrar costos a los compradores. El transporte solamente se cobra a precio de costo – es decir la PDVSA no realiza ganancias a través de él – lo que también representa un ahorro para los compradores.⁴³

4.3.3 Ampliación conjunta de la infraestructura

Finalmente PDV Caribe tiene la tarea de construir una infraestructura amplia de buques de carga, almacenes, terminales, refinerías y redes de distribución. Para eso se requieren amplias inversiones por parte de las empresas conjuntas entre PDVSA y las empresas estatales de la región. Existen planes concretos que comprenden la ampliación y conversión de refinerías en Jamaica y Cuba y la construcción de varias terminales en Cuba, Jamaica y República Dominicana. La construcción de una infraestructura propia para la refinación es indispensable por las características del petróleo venezolano, ya que solamente refinerías especialmente adaptadas están en condiciones de procesar el crudo pesado venezolano y convertirlo en petróleo.⁴⁴ Al margen de la toma de posesión de Daniel Ortega en enero del 2007, Hugo Chávez anunció la construcción de una refinería en Nicaragua.

Sin embargo, no todos los países están contentos con la iniciativa venezolana. Así, Trinidad y Tobago, por ejemplo, se mantuvo alejado del tratado Petrocaribe. El estado isleño también exporta petróleo y sus derivados y teme menores ventas por la competencia venezolana. Podría perder parte de su clientela por las condiciones atractivas de Petrocaribe.⁴⁵

México, el segundo exportador de petróleo después de Venezuela, tampoco forma parte de las recientes iniciativas venezolanas en la región. La política energética mexicana es influenciada fuertemente por intereses estadounidenses. El ex-presidente mexicano Vicente Fox promovió la apertura paulatina del sector petrolero estatal en el marco de la iniciativa norteamericana ASPAN (Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte).⁴⁶

4.3.4. Petrosur

Venezuela también acordó una serie de proyectos con los países del MERCOSUR, que se enmarcan en la iniciativa regional Petrosur. En mayo del 2005 Argentina, Brasil y Venezuela concertaron coordinar su política energética en forma más estrecha, en el marco de Petrosur. Se acordaron tres proyectos iniciales: Actividades prospectivas en la Facha del Orinoco (Venezuela) por parte de PDVSA, Petrobras y ENARSA; la construcción de una refinería en el estado brasileño de Pernambuco (PDVSA y Petrobras) y el acceso a nuevas reservas petroleras y gasíferas en Argentina (PDVSA y ENARSA).⁴⁷

A modo de complementar esas actividades, Venezuela lleva adelante una serie de cooperaciones bilaterales. En Argentina PDVSA ya tuvo un rol consultor en la creación de ENARSA. Junto a ENARSA, PDVSA no solo realiza tareas de exploración, sino también está comprometido en la construcción de una red de gasolineras de la marca ENARSA/PDV, con unas 600 sucursales planeadas.⁴⁸ Venezuela vende su petróleo a Argentina bajo condiciones preferenciales y compra a cambio carne de vacuno argentina y maquinaria para la agricultura. Además, Venezuela ha encargado cuatro buques petroleros al astillero argentino Río Santiago.⁴⁹

En febrero del 2005 Venezuela acordó la formación de una "alianza estratégica" con Brasil, para llevar adelante diversos proyectos del ámbito energético, petrolero y gasífero, entre ellos la refinería conjunta en Pernambuco y varios proyectos de etanol y biodiesel.⁵⁰ Uruguay también recibe petróleo

⁴³ Tratado Petrocaribe, pie de página 41.

⁴⁴ Véase Eduardo Mayobre, pie de página 32, p. 25.

⁴⁵ Humberto Márquez, 'Chávez trae petróleo y misiones sociales', Inter Press Service (IPS), 22 de julio de 2005.

⁴⁶ John Saxe-Fernández, 'México – Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética', en: Nueva Sociedad, No. 204, 2006, p. 186-199.

⁴⁷ 'Acuerdo ministerial conjunto define bases y proyectos iniciales de PETROSUR', Ministerio de Comunicación e Información, comunicado de prensa, Caracas, 10 de mayo de 2005.

⁴⁸ 'Venezuela y Argentina llenaron el primer tanque de gasolina ENARSA/PDV en Bs.As.', PDVSA comunicado de prensa, 1 de febrero de 2005.

⁴⁹ Miguel Lozano, 'Petrosur abre camino a integración sudamericana', Prensa Latina, 15 de agosto de 2005.

⁵⁰ 'Comunicado conjunto sobre Alianza Estratégica Venezuela-Brasil', Caracas, 14 de febrero de 2005.

venezolano a condiciones preferenciales: la posibilidad de financiar a crédito una parte de la factura y la posibilidad de pagar la deuda con carne y otros alimentos.⁵¹

4.3.5 Petroandina

A los países de la Comunidad Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia) Venezuela les ofreció una cooperación más estrecha en el marco de la iniciativa Petroandina. En una reunión en julio del 2005 en Lima los participantes aprobaron el "Acta Presidencial de Lima". En él, los países de la CAN expresan su interés por una integración energética más profunda, sin embargo, es cosa de cada miembro llenar con vida a la propuesta Petroandina.

Ecuador fue el primer país en aceptar la oferta y desde entonces está negociando la refinación de petróleo ecuatoriano en Venezuela. El ex-ministro de economía y actual presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que esto sería un "buen negocio", ya que de esta forma el país bajaría el costo de sus importaciones de combustible. A pesar de sus reservas de petróleo propias, Ecuador depende de importaciones de combustible debido a que carece de capacidades de refinación.⁵²

El lazo más estrecho, sin embargo, existe con Bolivia donde Petroandina ha sido creada como empresa conjunta de PDVSA con la estatal boliviana YPFB. Después de que Evo Morales anunciara la nacionalización de la industria petrolera y gasífera boliviana el primero de mayo del 2006, Venezuela y Bolivia a las pocas semanas firmaron una serie de acuerdos de cooperación. Entre ellos se encuentran proyectos exploratorios conjuntos de YPFB y PDVSA, la construcción de dos plantas transformadoras de gas y sobre todo la creación de Petroandina. A YPFB le pertenece el 51%, a PDVSA el 49% de Petroandina. Un primer proyecto consiste en la construcción de una red de gasolineras en Bolivia.⁵³

4.4 Gran Gasoducto del Sur: un megaproyecto controvertido

El proyecto más ambicioso, pero también más controvertido, propagado por Venezuela en el marco de ALBA, es sin embargo la construcción del mega-gasoducto "Gran Gasoducto del Sur". Este llevaría desde Puerto Ordaz en Venezuela pasando por Brasil hasta Argentina, cruzando áreas ecológicamente sensibles, como Gran Sabana o la Amazonía. En diciembre del 2005 los ministros de energía de Argentina, Brasil y Venezuela, acordaron estudiar la factibilidad de lo que sería el gasoducto más largo del mundo. Para ese fin se han creado una serie de grupos de trabajo trilaterales.

Según estimaciones el tubo tendría un largo de entre 8.000 y 10.000 kilómetros, su construcción demoraría siete años y costaría entre 20 y 25 mil millones de dólares. La operación estaría a cargo de PDVSA (Venezuela), Petrobras (Brasil) y ENARSA (Argentina). Después de la nacionalización boliviana en mayo del 2006 también ha sido formalmente invitado Bolivia a hacerse parte del proyecto.⁵⁴

El presidente Chávez aseguró que el gasoducto "debe ser la locomotora de un nuevo proceso de integración cuyo objetivo sea derrotar la pobreza y la exclusión".⁵⁵ Como modelo nombró el proceso de unificación europea: "Así como la Unión Europea comenzó con aquella sociedad del hierro y el carbón, nosotros planteamos el gasoducto a América del Sur, utilizando la gran reserva de gas que tiene Venezuela".⁵⁶ En efecto, el país cuenta con dos tercios de las reservas de gas en Sudamérica, seguido por Bolivia.

El ministro de energía, Rafael Ramírez, enfatizó la importancia central que Venezuela otorga al Gasoducto del Sur: "Creemos que el gasoducto que se ejecutará entre Puerto Ordaz y Buenos Aires va a ser la obra de integración más importante que se habrá desarrollado en nuestro continente."⁵⁷

⁵¹ Miguel Lozano, pie de página 49.

⁵² Humberto Márquez, pie de página 45.

⁵³ 'Venezuela y Bolivia firmaron acuerdos en materia energética', Ministerio de Energía y Petróleo, Gobierno Bolivariano de Venezuela, comunicado de prensa, 26 de mayo de 2006.

⁵⁴ Declaración de Puerto Iguazú, 4 de mayo de 2006.

⁵⁵ Citado en: Raúl Zibechi, 'Integración regional: punto de inflexión', ALAI AMLATINA, Montevideo, 28 de abril de 2006.

⁵⁶ Citado en: Karina Jiménez Tolentino, 'Gasoducto en la Picota', Tiempos del Mundo, 22 de junio de 2006. Chávez se refiere a la Comunidad Europea del Carbón y del Acero fundada en 1952.

⁵⁷ 'Bautizado 'Gran Gasoducto del Sur'', PDVSA comunicado de prensa, 20 de enero de 2006.

4.4.1 Dudas acerca de la factibilidad

Existen, sin embargo, dudas substanciales con respecto a la factibilidad y el sentido de este megaproyecto. Hay dudas, por ejemplo, sobre si la cantidad de gas venezolano será suficiente para un proyecto de esta dimensión. El país sí dispone de grandes reservas, sin embargo el 90% de ellas es gas acompañante del petróleo. Alrededor de la mitad de este gas asociado se reinyecta a los yacimientos durante el proceso de extracción para mantener la presión, otra parte es quemada sin utilizar. En este momento Venezuela gasta la totalidad de su propia extracción de gas. Además, el país está sujeto a cuotas de extracción de petróleo por ser miembro de la OPEP y por eso no puede ampliar su extracción de gas a voluntad. El volumen de flujo planeado para el gasoducto llega al doble de la producción venezolana actual. Además, el país recién hace pocos años ha comenzado a explorar el gas natural no-asociado. Por lo tanto la *Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe* (Centro Nacional de Ciencias Geológicas y Recursos Naturales) alemana en su análisis del proyecto llega a la siguiente conclusión: "Las reservas de gas natural no-asociado confirmadas hasta ahora en teoría sólo podrían abastecer al gasoducto por algunos años." Por lo tanto se requeriría de "esfuerzos exploratorios y de desarrollo substanciales para posibilitar una producción de gas natural a largo plazo a un alto nivel."⁵⁸

4.4.2 Bolivia como perdedor

Existen también una serie de dudas al respecto de la rentabilidad económica del proyecto. Existe la sospecha, que por la alta capacidad planeada la oferta de gas natural en Sudamérica podría superar a la demanda. Los grandes consumidores de gas, Brasil y Argentina, podrían utilizar las reservas propias e importaciones de Bolivia, como hasta ahora. Existen ya dos gasoductos con los que Bolivia suministra gas natural a Brasil y a Argentina.

Por lo tanto, surgieron especulaciones que Brasil podría tener un interés especial en el gasoducto para presionar a Bolivia en las negociaciones sobre el precio de exportación del gas boliviano.⁵⁹ Las relaciones entre ambos países estu-

vieron tensas desde la nacionalización boliviana. Petrobras, como mayor inversor extranjero en Bolivia, fue especialmente afectado por esta medida.⁶⁰

La mitad del gas natural consumido por Brasil proviene de Bolivia. El gas venezolano podría disminuir la dependencia del país de Bolivia. Pero Bolivia podría ser el perdedor. La política venezolana al respecto aparece ambivalente: Por un lado apoya activamente al rumbo nacionalizador de Bolivia, por otro lado a través del mega-gasoducto Venezuela se convertiría en competidor de Bolivia en los mercados argentinos y brasileños.

Sin embargo, los comentarios por parte de Brasil hasta ahora han sido contradictorios. Mientras que el gerente de gas y energía de Petrobras, Ildo Sauer, pronostica una reducción de costos por la compra del gas venezolano de 11 mil millones de dólares al año, el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, se opone al proyecto. Debido a numerosos problemas económicos, ambientales y técnicos el inicio de obras y su término podrían dilatarse considerablemente. El resultado serían costos "sustancialmente mayores" que los 20 a 25 millones de dólares proyectados, lo que a su vez se reflejaría en el precio del gas natural.⁶¹ El presidente Lula, sin embargo, enfatizó que la construcción del gasoducto tiene prioridad para Brasil.⁶²

4.4.3 Financiamiento incierto

Las dudas mayores sobre la rentabilidad económica, sin embargo, se refieren a la longitud del tubo. Hasta ahora, el gas natural se transporta por gasoductos con un máximo de 5.000 kilómetros de largo, el transporte por mayores distancias se considera no rentable. Ya a partir de una longitud de 3.000 kilómetros la licuefacción de gas (gas natural licuado – GNL) y su transporte por barco es más económica. Así se podrían construir terminales de GNL en la costa caribeña de Venezuela para enviar el gas líquido en buques petroleros especiales a Brasil o Argentina, para luego reconvertirlo mediante plantas regasificadoras. Este tipo de plantas ya se ha mencionado en varias ocasiones.⁶³

El ex-ministro de energía de Bolivia, Guillermo Torres Orías,

⁵⁸ Hans Georg Barbies/Hilmar Rempel, 'Erdgas in Südamerika', Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Commodity Top News, Núm. 25, Hannover, 9 de marzo de 2006, p. 5.

⁵⁹ Gerardo Honty, 'Interconexión energética sin integración política', Revista del Sur, Nro. 165, mayo/junio de 2006.

⁶⁰ Para una discusión más detallada véase: Thomas Fritz, pie de página 35.

⁶¹ 'Petrobras cree que el gran Gasoducto del Sur es un proyecto difícil y más caro de lo previsto', Clarín, 30 de marzo de 2006.

⁶² 'Las dudas de la integración energética', Americaeconomica.com, 17 de febrero de 2006.

⁶³ Véase Barbies/Rempel, pie de página 58.

ha calculado públicamente que la alternativa de GNL posiblemente sólo costaría la mitad que el gasoducto: 3 mil millones de dólares para la planta de licuefacción, entre 5 y 6 mil millones para la flota de buques y mil millones para la planta regasificadora. "La inversión total en la cadena de provisión de GNL estaría entre 9.000 y 10.000 millones de dólares, la mitad de la inversión requerida para la construcción del Gasoducto del Sur."⁶⁴

En vista de estas contradicciones es poco sorprendente que el financiamiento de este megaproyecto no se haya aclarado aún. Debido a los riesgos la captación de inversiones privadas es poco probable, por lo tanto tendrán que fluir dineros estatales. Petrobras ya ha exigido que Venezuela cubra la mitad del costo de construcción. De Venezuela se dice que ya habría reservado 10 mil millones de dólares para el gasoducto. Al mismo tiempo Petrobras ha invitado a la estatal rusa Gazprom a hacerse parte del proyecto. Gazprom ha mostrado su interés de participar.⁶⁵

Aunque el financiamiento todavía permanece sin resolver y dineros privados serán difíciles de adquirir no se puede descartar, que se dé inicio al proyecto mediante financiamiento público.

4.4.4 Protestas de organizaciones no gubernamentales

Esta perspectiva, en cambio, provocó protestas de organizaciones no-gubernamentales. Activistas medioambientales temen enormes daños en regiones ecológicamente sensibles como la Gran Sabana en Venezuela o en bosques tropicales del área amazónica. Deforestaciones producto de la construcción a lo largo del gasoducto, la erosión del suelo provocada por la tala, la expulsión de mas de 40 comunidades indígenas, la contaminación por agujeros que habitualmente se producen en los tubos y la pérdida de flora y fauna en centros de diversidad biológica.

En una carta abierta a los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela las organizaciones no-gubernamentales exigieron la suspensión inmediata del proyecto que consideran como "el paso definitivo para la destrucción de la Amazonía, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica". Critican que ese "faraónico proyecto" haya sido proclamado oficialmente sin consultaciones

públicas previas ni la realización de estudios sobre sus posibles impactos. Además rechazan "la integración que visualiza el desarrollo del Proyecto 'Gasoducto del Sur' (...). Esta mal llamada integración, no traería ni unidad ni bienestar a los pueblos del Sur ya que está fundamentada en la sobre-explotación de los recursos naturales y en la destrucción del patrimonio biodiverso que existe en esta excepcional región."⁶⁶

El ecologista brasileño Roberto Smeraldi caracterizó el proyecto como "locura". Los daños en la Amazonía serían enormes. Si se respetase solamente a la legislación medioambiental brasileña, a su juicio el gasoducto costaría al menos 50 mil millones de dólares y con eso el doble de la suma proyectada hasta ahora.⁶⁷

El grupo venezolano „Red Alerta Petrolera" exige la suspensión de las planificaciones "hasta que haya un debate auténticamente informado y democrático en la región acerca de la 'cara oscura' del proyecto." Sería un procedimiento dudoso por un lado llevar una discusión continental sobre el ALCA y por otro lado ignorar un tema tan vital como el gasoducto. Una integración regional responsable tendrá que basarse en energías renovables y no en el "*petro y gas desarrollismo* contaminante e insustentable".⁶⁸

4.5 Energía: ¿un vehículo adecuado para la integración?

Las iniciativas para la integración energética demuestran tanto los avances como las contradicciones del proyecto ALBA. Por un lado contienen elementos sociales y solidarios innovadores, mientras por otro lado conservan una práctica integradora convencional que apuesta a la expansión de infraestructuras centralistas para las energías fósiles. Además, hasta ahora no han sido sometidas a un debate público.

4.5.1. La „fuerza expansiva" del rumbo nacionalizador

Los proyectos energéticos del ALBA persistentemente persiguen el objetivo de recuperar el control sobre la cadena de valor energética completa, después de la ola de privatizaciones de los años noventa. Y lo hacen con éxito.

⁶⁴ Citado en: Gerardo Honty, pie de página 59.

⁶⁵ Pie de página 62.

⁶⁶ 'Rechazo a la construcción del Gasoducto del Sur', Adital, 3 de abril de 2006.

⁶⁷ Miguel Sánchez, 'La Amazonia Está en Peligro, Denuncian', Tiempos del Mundo, 22 de junio de 2006.

⁶⁸ 'El proyecto del gigante gasoducto Trans-amazónico: Se acrecienta el salto al abismo', Red Alerta Petrolera, Caracas, 24 de enero 2006.

En varios países sudamericanos el estado está retomando un rol más activo en el sector petrolero, se pone a crear nuevas empresas estatales, eleva a los tributos para empresas privadas y los reinvierte no solamente en la extracción de petróleo y gas, sino también en la infraestructura pública y en proyectos sociales. Aparte de Venezuela, sobre todo Bolivia, Argentina y Ecuador brindan ejemplos de esa práctica. El pilar energético de ALBA, Petroamérica, con ésto está apoyando un giro de la tendencia: desde el control privado de los recursos naturales hacia el control estatal.

Las cooperaciones en este sentido no son arbitrarias, sino están ligadas a condiciones claras. Exigen la cooperación de empresas energéticas estatales. Donde no existen empresas energéticas públicas, Venezuela apoya su creación. Esto, por ejemplo, ha sido acordado explícitamente en el tratado Petrocaribe. Con esto, el país se prepara para un proceso de transformación a largo plazo. No se puede descartar, por lo tanto, que en el transcurso del tiempo más países, que aún siguen el itinerario neoliberal – así por ejemplo la mayoría de países centroamericanos, México, Colombia, Perú o Chile – sean alcanzados por este giro de tendencia. También es posible una repercusión más fuerte de las re-nacionalizaciones venezolanas y bolivianas hacia los gobiernos de izquierda de Uruguay, Argentina, Brasil o Ecuador.

El economista argentino Claudio Katz, por ejemplo, advierte la función ejemplar de la nacionalización boliviana: "La decisión adoptada en el Altiplano refuta todos los argumentos que subrayan la inconveniencia o imposibilidad de confrontar desde la periferia con las grandes compañías transnacionales. Si un país tan pobre y saqueado como Bolivia puede iniciar esta acción: ¿Qué impide a las grandes naciones de Sudamérica recuperar el manejo efectivo del petróleo y el gas?" Katz además aduce lo novedoso del contexto actual. A diferencia de años anteriores, los acontecimientos nacionales tienen fuertes repercusiones en la región: "La discusión se ha regionalizado y las medidas de nacionalización en un país brindan argumentos para extender su aplicación al resto."⁶⁹

A la vez, los proyectos energéticos del ALBA disponen de elementos solidarios importantes, entre ellos créditos con condiciones ventajosas y la posibilidad de pagar parte de la factura con exportaciones de bienes y servicios. Esto les ahorra costos reales a los beneficiados. En vista de los precios del petróleo volátiles y su tendencia al alza, esta oferta no se debería subestimar. Los tratados Petrocaribe amorti-

guan los efectos de las recurrentes alzas súbitas en el precio del petróleo, que llevan al endeudamiento de muchos importadores de petróleo en el tercer mundo. Iniciativas como éstas seguramente serían extremadamente bienvenidas en otras regiones en vías de desarrollo también.

Finalmente, las iniciativas del ALBA también pueden tener un efecto directo sobre la distribución de la riqueza. Los medios, que se ahorran por la eliminación de intermediarios privados, van en parte a fondos de desarrollo, que han sido creados en el marco de Petrocaribe y del tratado ALBA-TCP.

4.5.2 La influencia creciente de Venezuela

A pesar de sus elementos sociales y solidarios los proyectos energéticos también traen consigo una serie de contradicciones. Venezuela, por ejemplo, a través de su entrega preferencial de petróleo y sus créditos ventajosos obviamente también gana influencia política sobre sus socios comerciales. Esta influencia crece con la asimetría de los socios. Especialmente el tratado Petrocaribe une a socios muy desiguales, con lo que refiere a su tamaño y su poderío económico. Los demás proyectos energéticos también sirven, sin duda alguna, a la creación de una clientela fija en Latinoamérica y, con esto, a la diversificación de la clientela venezolana. Cerca del 60% de las exportaciones venezolanas todavía van a los Estados Unidos – una dependencia que Venezuela quiere eliminar. Para algunos de sus clientes, sin embargo, esta política lleva a una mayor dependencia. República Dominicana importa el 65% de su petróleo desde Venezuela, Cuba el 69% y Jamaica el 76%.⁷⁰

Además, algunos países exportadores temen a la competencia que pueda provenir de los proyectos energéticos bajo la bandera del ALBA. Trinidad y Tobago mira con preocupación la expansión venezolana a través de Petrocaribe. Bolivia podría verse sujeto a competencia venezolana por el gasoducto en sus mercados gasíferos en Argentina y Brasil. A la vez, esta práctica demuestra también que, al parecer, el ALBA mantiene la práctica poco dichosa de los megaproyectos de desarrollo.

4.5.3. Ruptura con los principios del ALBA

El gasoducto planeado es difícil de compaginar con los principios del ALBA. Es poco evidente, qué aporte quiere hacer este proyecto para combatir a la pobreza. La mayoría de los

⁶⁹ Claudio Katz, pie de página 2.

⁷⁰ Eduardo Mayobre, pie de página 32, p. 56.

pobres viven en áreas rurales. Muchos de ellos siguen sin tener acceso a la energía eléctrica. El gasoducto no significará ayuda alguna para ellos, ya que llegará a los centros industrializados de Brasil y Argentina, las regiones de São Paulo y Buenos Aires.

La inseguridad sobre la sustentabilidad económica además conlleva riesgos de grandes pérdidas para los países participantes. Megaproyectos sobredimensionados y mal calculados ya han contribuido sustancialmente a la deuda pública latinoamericana en el pasado en reiteradas ocasiones. Daños medioambientales a gran escala también son inevitables en la construcción y la operación del gasoducto. Esto es otro ejemplo de todas aquellas infraestructuras centralizadas, que tienen por objetivo asegurar la distribución de energía fósil a largo plazo – y con esto impiden efectivamente la promoción de energías renovables y soluciones más descentralizadas.

En este sentido, este proyecto responde también en forma antidemocrática a la pregunta por el modelo de producción y de consumo. Claudio Katz menciona a los diferentes objetivos potenciales de un gasoducto: “El mismo gas puede servir para abaratar el consumo corriente de la mayoría popular, para erigir emprendimientos de uso colectivo o para garantizar insumos baratos a los grandes grupos capitalistas. Son destinos diferentes, que serán predeterminados al momento de resolver quién construye y financia un gasoducto de 8000 kilómetros.”⁷¹ Se evita, sin embargo, un debate público sobre estos destinos.

Así, el Gran Gasoducto del Sur representa una práctica integradora convencional, que el autor Gerardo Honty expresa de la siguiente manera, “el motor de la integración sigue siendo facilitar la infraestructura para lograr el mayor suministro de energía al precio más bajo, aumentando la deuda externa de los países y sin llegar a los sectores que hoy no tienen – o tienen muy escaso – acceso a la energía.”⁷²

4.5.4 El déficit: La democratización de las empresas públicas

En vista del alto significado que el ALBA otorga a la integración energética habría que esperar que justamente los proyectos energéticos obedezcan a los principios exigentes de ALBA. Pero esto es verdad sólo parcialmente. Para llegar a un modelo de desarrollo alternativo social y ecológico al parecer no basta con nacionalizar las energías fósiles y con poner su explotación en manos de empresas estatales.

La Alianza Social Continental tiene razón cuando advierte de que con el modelo energético actual, basado en energías fósiles, no solamente las empresas transnacionales, “sino también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades”.⁷³ Por lo tanto, habría que democratizar las empresas públicas y las políticas energéticas estatales, si se quiere que éstas aporten a una integración alternativa. Como cualquier otro sector, la energía puede ser un vehículo integrador. La pregunta sólo es si este vehículo es conducido en forma democrática o autoritaria.

Pero es justamente en este ámbito donde las iniciativas energéticas del ALBA tienen los mayores déficits. No es aceptable, iniciar proyectos gigantescos sin forma alguna de debate público. Los iniciadores del Gran Gasoducto del Sur al parecer no están concientes, que su forma de actuar puede desacreditar el ALBA en sí. Si se implementase el gasoducto de la forma antidemocrática actual, la credibilidad de la Alternativa Bolivariana podría quedar afectada sustancialmente. Todos aquellos logros positivos, los elementos sociales y solidarios, podrían verse relegados a un segundo plano.

⁷¹ Claudio Katz, ‘Las disyuntivas del ALBA’, especial para Argenpress.info, 2 de abril de 2006.

⁷² Gerardo Honty, pie de página 59.

⁷³ Alianza Social Continental, ‘Las organizaciones de la sociedad civil hacia la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones’, Santiago de Chile, 22.-23. de noviembre de 2006.

5 Conclusión: Avances y contradicciones

Los avances y las contradicciones del ALBA, sin embargo, no solamente se pueden estudiar mirando el ejemplo de las políticas energéticas, sino también mediante el estudio de las otras iniciativas, sean los acuerdos comerciales, las propuestas de política financiera o la inclusión propuesta de los movimientos sociales.

5.1 Entre solidaridad y libre comercio

Al contrario de los acuerdos comerciales tradicionales el tratado ALBA-TCP considera la asimetría entre los socios, su nivel de desarrollo desigual. Bolivia, por ejemplo, beneficia en forma amplia del tratado, pero no es instada a una liberalización amplia de sus mercados. Las tres partes se conceden mutuamente un trato especial. El énfasis está en cooperaciones en beneficio mutuo. Las inversiones en las áreas de salud y educación demuestran el enfoque del tratado hacia el combate a la pobreza. Su utilidad inmediata para grandes partes de la población es indiscutible.

A la vez, sin embargo, Bolivia y Venezuela, en el marco de sus participaciones en la CAN y el MERCOSUR respectivamente, están negociando acuerdos de asociación con un contenido completamente opuesto a los principios del ALBA y del TCP. Así por ejemplo, la UE no solamente exige rebajas arancelarias para casi todos los grupos de productos, sino también la liberalización de servicios, inversiones y compras gubernamentales. Bolivia ha presentado un catálogo amplio de criterios en el inicio de negociaciones entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, que exige la consideración de las asimetrías entre las partes. Sin embargo, es poco realista pensar que esto se pueda cumplir.⁷⁴

Las demandas bolivianas se contraponen a los intereses económicos centrales de la Unión Europea. Además, en el ámbito del marco negociador de la Comisión Europea, son prácticamente incumplibles. Además, hace solo pocos meses la Comisión ha acordado una nueva estrategia comercial, que prevé demandas liberalizadoras aún más estrictas en beneficio de las empresas europeas.⁷⁵

La afiliación de Venezuela al MERCOSUR y la afiliación potencial de Bolivia al mismo pacto plantea aún más preguntas sobre la consistencia del proyecto ALBA. Aquella unión arancelaria no satisface los principios centrales del ALBA-TCP, ni pueden estos dos países resistir a la competencia brasileña o argentina. Un estudio del instituto de investigación social ILDIS llega a la conclusión de que, a excepción de las industrias de petróleo y de acero, numerosos sectores venezolanos no estarían preparados para una rebaja arancelaria en el marco del MERCOSUR. Esto sería sobre todo el caso de toda la industria alimentaria. En total 1,9 millones de puestos de trabajo peligrarían, directa o indirectamente, por la entrada al MERCOSUR.⁷⁶

El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) también advierte sobre los impactos de este paso. Sin considerar las exportaciones de gas a Argentina y Brasil, Bolivia cuenta con un déficit comercial con el MERCOSUR de 613 millones de dólares. Este déficit es especialmente marcado en el sector de productos agrarios. El IBCE deduce, que el MERCOSUR sería una "amenaza real" para los sectores agrario e industrial "por su cercanía geográfica y los menores costos de producción y transporte". Además, si Bolivia acepta la reglamentación arancelaria del MERCOSUR, pondría en peligro su participación en la Comunidad Andina.⁷⁷

5.2 Entre autonomía y el pago de la deuda

Dudas similares sobre la consistencia del ALBA surgen al observar las propuestas de política financiera. Así, la creación de un Banco del Sur podría posibilitar el otorgamiento de créditos sin el condicionamiento de realizar ajustes estructurales al estilo Banco Mundial y FMI. Si esto, sin embargo, constituye un avance, va a depender de los tipos de proyectos en que invertiría el banco sudamericano finalmente. Si, por ejemplo, los gobiernos participantes acordasen considerar al mega-gasoducto empujado por Venezuela como un proyecto integrador digno de financiar, entonces habría que dudar del potencial progresista de un banco de esa índole.

⁷⁴ Véase Ronald Köpke, pie de página 10, pp. 29.

⁷⁵ Véase: 'Global Europe Competing in the World', European Commission, External Trade, Bruselas 2006.

⁷⁶ Osvaldo Alonso, 'Incorporación al MERCOSUR: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela', Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), Caracas, octubre de 2005.

⁷⁷ 'IBCE desaconseja ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR', Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), 19 de diciembre de 2006.

Claudio Katz además critica, que la compra de bonos argentinos por parte de Venezuela, finalmente le permitió a Argentina pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional. Si el Banco del Sur seguiría ese ejemplo y posibilitaría el pago de la deuda frente a los acreedores del Norte, esto sería contraproducente, ya que las causas del endeudamiento seguirían sin ser cuestionados. "El reciclaje de los pagos choca, además, con la perspectiva de un frente común de deudores que pondría fin al drenaje de divisas, advierte Katz.⁷⁸

5.3 El desafío democrático

El mayor desafío, sin embargo, parece ser el de la participación ciudadana. A pesar de que el ALBA se presenta abierto a propuestas desde los movimientos sociales, todas las decisiones relevantes hasta ahora se han tomado por el lado de los gobiernos. El tratado ALBA-TCP surgió sin participación de la sociedad civil que haya sido reconocible. Proyectos energéticos como el gasoducto son llevados hacia adelante sin participación pública. Si se recogen propuestas de los movimientos sociales, como en el caso de la creación

de una red regional de empresas recuperadas, es porque no conllevan potencial conflictivo. ALBA, por lo tanto, aún atiende demasiado poco a la pluralidad de la sociedad civil. Existen diferentes visiones sobre modelos alternativos de integración. Con una mayor apertura al debate sobre modelos diferentes de integración el ALBA sólo podría ganar.

Los movimientos sociales, en cambio, pueden ejercer la mayor influencia posible sobre el ALBA y los demás bloques regionales desarrollando modelos de integración propios. Las contradicciones del ALBA confirman la advertencia de Alberto Arroyo, de que no es cuestión sólo de escoger "entre las propuestas que vienen de los gobiernos progresistas del Mercosur, de Venezuela o de Bolivia".⁷⁹ Más bien se requiere desarrollar modelos propios, para desde esa base desafiar o apoyar a las iniciativas gubernamentales. El ALBA, sin duda, ha hecho un aporte importante a la discusión sobre alternativas de integración regional. A pesar de todas las contradicciones la Alternativa Bolivariana de las Américas ha comprobado, que los márgenes de acción para una integración social y solidaria son mucho más amplios de lo que afirman muchos gobiernos.

⁷⁸ Claudio Katz, pie de página 71.

⁷⁹ Alberto Arroyo, pie de página 8.

6 Literatura

- Alianza Social Continental, 2006a: Las organizaciones de la sociedad civil hacia la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Santiago de Chile, 22.-23 de noviembre de 2006.
- 2006b: Algunos Puntos para el Debate sobre Integración Regional. Documento de Trabajo, 10 de agosto de 2006.
- Alonso, Osvaldo, 2005: Incorporación al MERCOSUR: efectos potenciales sobre la fuerza de trabajo en Venezuela. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ildis), Caracas, octubre de 2005.
- Arroyo, Alberto, 2006: Reflexiones ante la Cumbre de Cochabamba. En: America Latina en movimiento, número 414-415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 22-24.
- Azzi, Diego/Harris, David, 2006: ALBA – Venezuela's answer to 'free trade': the Bolivarian alternative for the Américas. Alianza Social Continental/Focus on the Global South (ed.), São Paulo/Bangkok, octubre de 2006.
- Badenes, Daniel, 2005: Chávez propone formar una red de empresas recuperadas del Sur. Argenpress.info, 28 de octubre de 2005.
- Bank Information Center/Coalición Ríos Vivos/Núcleo Amigos de la Tierra-Brasil, 2004: Otra Integración es Posible y Está en Marcha: La Iniciativa de los Gobiernos y las Instituciones Financieras Internacionales para la Integración de la Infraestructura Regional de Sudamérica (IIRSA). Una Crítica Preliminar por la Perspectiva de la Sociedad Civil, junio de 2004.
- Barbies, Hans Georg/Rempel, Hilmar, 2006: Erdgas in Südamerika. Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Commodity Top News, núm. 25, Hannover, 9 de marzo de 2006.
- Congreso Bolivariano de los Pueblos, 2005: Construyendo el ALBA desde los pueblos. Una propuesta de unidad para los pueblos de Nuestra América. Secretaría de Organización, 2005.
- European Commission, 2006: Global Europe Competing in the World. External Trade, Bruselas, 2006.
- FOBOMADE, 2006: Soya boliviana, mercado colombiano, transgénicos y TLC, Foro Boliviano Sobre Medioambiente Y Desarrollo, 24 de marzo de 2006.
- Fritz, Thomas, 2006: Die Plünderung ist vorbei. Boliviens Nationalisierung der Öl- und Gasindustrie. FDCL, Berlín, septiembre de 2006.
- 2005: Special and differential treatment for developing countries. Heinrich-Böll-Stiftung/Germanwatch, Global Issue Paper, núm. 18, Berlín, julio de 2005.
- 2004: Um mau negócio. O Acordo de Cooperação Interregional entre o Mercosul e a União Européia. Documento de trabajo de BLUE 21, Berlín, 6 de octubre de 2004.
- Honty, Gerardo, 2006: Interconexión energética sin integración política', Revista del Sur, núm. 165, mayo/junio de 2006.
- IBCE, 2006: IBCE desaconseja ingreso pleno de Bolivia al MERCOSUR. Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 19 de diciembre de 2006.
- Jiménez Tolentino, Karina, 2006: Gasoducto en la Picota. Tiempos del Mundo, 22 de junio de 2006.
- Katz, Claudio, 2006a: El torbelino de la integración, 25 de julio de 2006, www.cadtm.org
- 2006b: Las disyuntivas del ALBA. Especial para Argenpress.info, 2 de abril de 2006.
- Köpke, Ronald, 2007: Implicaciones de los acuerdos comerciales de la Comunidad Europea con Centroamérica y los Países Andinos. FDCL, Berlín, febrero de 2007.
- Lander, Edgardo, 2004: ¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y resistencias populares'. In: OSAL, año V., núm. 15, septiembre/octubre de 2004, p. 45-56.
- Lora, Miguel, 2004: Petroamérica, la estrategia sudamericana para recuperar su soberanía energética. Rebelión, 8 de junio de 2004.
- Lozano, Miguel, 2005: Petrosur abre camino a integración sudamericana. Prensa Latina, 15 de agosto de 2005.
- Márquez, Humberto, 2005: Chávez trae petróleo y misiones sociales. Inter Press Service (IPS), 22 de julio de 2005.
- Mayobre, Eduardo, 2005: La propuesta Petroamérica y la Integración Energética de América Latina y El Caribe. Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS), noviembre de 2005.
- Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración solidaria de los pueblos, 2006: TCP: la propuesta boliviana para un comercio justo entre los pueblos, 13 de abril de 2006.
- Piskur, Michael, 2006: Venezuela Moves to Nationalize its Oil Industry. Power and Interest News Report (PINR), 19 de mayo 2006.

- Red Alerta Petrolera, 2006: El proyecto del gigante gasoducto Trans-amazónico: Se acrecienta el salto al abismo. Caracas, 24 de enero de 2006.
- Russau, Christian, 2004: Enforcement of international trade regimes between the European Union (EU) and the Common Market of the South (MERCOSUR)?. FDCL, Berlín, enero de 2004.
- Sánchez, Miguel, 2006: La Amazonia Está en Peligro, Denuncian. Tiempos del Mundo, 22 de junio de 2006.
- Saxe-Fernández, John, 2006: México – Estados Unidos: seguridad y colonialidad energética. En: Nueva Sociedad, núm. 204, 2006, p. 186-199.
- Valencia, Judith, 2006: ¡Comunidad sur-americana no puede ser un camino al ALCA! En: America Latina en movimiento, núm 414-415, año 30, 4 de diciembre de 2006, Integración: Nuevas rutas, p. 5-7.
- 2005: El Alba elabora filosófica. Aspectos Filosóficos y Constitucionales del Alba. Primer encuentro por la Consolidación de un Nuevo Estado de Derecho y de Justicia Social en el Marco de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA), Barquisimeto, septiembre de 2005.
- Valente, Marcela, 2004: El estado se repliega dentro del mercado. Inter Press Service (IPS), Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.
- Zibechi, Raúl, 2006: Integración regional: punto de inflexión. ALAI AMLATINA, Montevideo, 28 de abril de 2006.

7 Anexo

Acuerdo de Cooperación Energética PETROCARIBE del 29 de junio del 2005			
<u>Firmantes:</u> Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Cuba, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Venezuela			
<u>Financiamiento a corto plazo:</u> Pago dentro de 90 días, después de 30 días con un 2% de interés			
Financiamiento a largo plazo			
Precio del petróleo en dólares por barril	Parte pagable a crédito (%)	Duración de los créditos (excluyendo los 2 años libres de amortización)	Tasa se interés (%)
>= 15	5	15	2
>= 20	10	15	2
>= 22	15	15	2
>= 24	20	15	2
>= 30	25	15	2
>= 40	30	23	1
>= 50	40	23	1
>= 100	50	23	1

Sobre el autor

Thomas Fritz: Consultor y publicista, colaborador del Centro de Investigación y Documentación Chile – Latinoamérica (FDCL) y miembro del directorio del Grupo de Trabajo Ecología y Desarrollo (BLUE 21).

Contacto: Thomas.Fritz@blue21.de



This publication was made possible through the financial support of the European Community. The opinions expressed therein represent the opinion of the author and do not represent the official opinion of the European Community.

This publication was elaborated within the framework of the cooperation-project "Handel-Entwicklung-Menschenrechte" of the Heinrich Böll Foundation (hbs), the Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika (FDCL), and the Transnational Institute (TNI). More information at:

<http://www.handel-entwicklung-menschenrechte.org>

